

Las bases sociales de la política Española

Juan Jesús González

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1. PRESENTACIÓN¹

Este artículo estudia la relación entre el sistema de partidos y el perfil social de los electorados de dichos partidos. Este perfil responde, por lo general, a criterios de diferenciación y desigualdad social tales como la clase, la edad, la etnia, así como la ideología y las preferencias políticas. En el caso español, el sistema de partidos de la transición se configuró con arreglo a dos ejes: la contraposición tradicional entre izquierda y derecha y la contraposición entre las fuerzas de ámbito nacional español y los nacionalismos periféricos de base étnico-cultural (la contraposición centro-periferia; Giner y Moreno 1990). Aquí nos vamos a referir al primero de estos ejes, el cual ha mostrado una gran estabilidad a lo largo de este primer cuarto de siglo de democracia. Ahora bien, dicha estabilidad ha sido posible en virtud de una serie de anclajes estructurales que han servido de apoyo a la contraposición izquierda-derecha y, con ello, a las ideologías de uno u otro signo. A lo largo de este proceso, la clase social ha jugado un papel relevante, si bien en ocasiones ha perdido influencia a favor de otros factores. Desde este punto de vista, podemos distinguir entre factores que han dado estabilidad al proceso político, como la clase, y factores de cambio como la edad, según veremos.

El artículo tiene cuatro partes: en la primera repasamos, de manera esquemática, la evolución del sistema de partidos desde la transición hasta las elecciones generales de 2004. En la segunda y tercera, exponemos las relaciones entre el partido socialista y los sindicatos, así como sus consecuencias electorales durante la etapa de gobierno socialista. Dedicaremos la última a desentrañar una paradoja: por qué el PP, que había conseguido en una legislatura lo que el partido socialista no había conseguido en cuatro (llevarse bien con los sindicatos), olvidó esa lección tan pronto como consiguió mayoría absoluta.

A lo largo de este proceso, mostraremos las fluctuaciones de la base social de los partidos, así como las distintas pautas de voto asociadas a ellas. Algunas de estas

¹ El autor agradece a Javier Echeverría sus amables comentarios y sugerencias.

fluctuaciones se derivan de lo expuesto. Así, por ejemplo, el debilitamiento del voto de clase a lo largo de los años noventa (como consecuencia, en parte, de las malas relaciones entre el partido socialista y los sindicatos) y la emergencia del llamado voto económico (que alcanzó su esplendor en las elecciones de 2000). Otras, en cambio, tienen que ver con los ciclos políticos y con el cambio de perfil electoral de los partidos a su paso por el gobierno. Esta evolución sigue una dinámica recurrente: a su paso por el gobierno, los partidos se comportan como autobuses cargados de votantes, pero sin que dichos votantes tengan que ser siempre los mismos necesariamente. Puede que el nivel de ocupación del autobús se mantenga más o menos estable a lo largo del recorrido (hay que tener en cuenta que, en el caso español, se trata de recorridos largos que pueden resultar fatigosos para algunos viajeros), pero si el nivel de ocupación se mantiene es porque los votantes que se apean en las sucesivas estaciones o convocatorias electorales son reemplazados por otros. Típicamente, ocurre que el perfil de edad de los electorados se va modificando como consecuencia, de que, al principio, el autobús suele ir abarrotado de jóvenes, movidos por la curiosidad y el afán de novedad, jóvenes que suelen dar muestras enseguida de desencanto y fatiga, dejando el asiento a viajeros más prudentes que solo se suben al autobús una vez que han comprobado la pericia del conductor y que el trayecto está exento de peligros.

2. LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS

En líneas generales, la evolución del sistema de partidos en España puede resumirse en cuatro períodos que podemos reducir a tres:

1. Durante el periodo de transición (1977-82) se estableció un sistema que podemos llamar de *pluralismo limitado*, estructurado sobre todo a partir de la oposición derecha-izquierda y con predominio de los partidos moderados en cada uno de los ámbitos del espectro ideológico (la Unión de Centro Democrático en la derecha y el PSOE en la izquierda).
2. Desde las elecciones generales de 1982 hasta las de 1993 prevaleció un sistema de partido *predominante o hegemónico*, con un mismo partido (el PSOE) obteniendo mayorías absolutas reiteradamente.
3. Entre 1993 y 2000, prevaleció un sistema bipartidista necesitado del apoyo de los partidos nacionalistas a fin de formar mayorías de gobierno, tanto durante la última legislatura socialista (1993-1996) como durante la primera de gobierno del PP (1996-2000).
4. Por último, el PP, que consiguió mayoría absoluta en las elecciones de 2000 y que parecía inaugurar así un nuevo periodo de partido predominante, desperdió esa posición en su segunda legislatura, regresando el PSOE al gobierno y con él el sistema de bipartidismo necesitado de apoyos nacionalistas.

Como se sabe, el sistema de partidos de la transición (1977-1982) fue resultado de la distribución de preferencias políticas en las primeras elecciones democráticas de 1977. En líneas generales, su configuración respondía a la idea de que los sectores que más protagonismo habían tenido durante el franquismo, ya fuese a favor o en contra del mismo, hubieron de conformarse con una posición secundaria tanto en la izquierda (en el caso de los comunistas respecto al PSOE), como en la derecha (en el caso de Alianza Popular respecto a la UCD). Esta relativa debilidad del Partido Comunista contrastaba no solo con su protagonismo anterior en la lucha anti-franquista, sino también con el protagonismo del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en el terreno sindical. En ese tiempo, CCOO desplegó una estrategia de ruptura con el sistema político y laboral del franquismo, actuando, más que como un sindicato, como un *movimiento sociopolítico* orientado a la implantación de un partido comunista poderoso, siguiendo las enseñanzas del sindicalismo comunista de Italia y Portugal². Pese a que CCOO no llegó a conseguir tal cosa, sí consiguió, en cambio, una correlación de fuerzas sindicales favorable, como lo prueba su victoria en las primeras elecciones sindicales de 1978, lo que suponía una ventaja apreciable del partido comunista a la hora de competir con el PSOE, pero sin que esta ventaja fuera aprovechada.

De hecho, a la hora de explicar el paso de este sistema inicial de *pluralismo limitado* al sistema de *partido predominante* característico de los años 80, no conviene olvidar la nueva correlación de fuerzas sindicales que se configura a principios de los ochenta. Como se recordará, UGT siguió durante la transición una estrategia diferenciada de la de CCOO, apostando por la moderación y la negociación³. La estrategia se materializó en forma de acuerdos con la patronal CEOE desde 1979 y empezó a dar resultados en los primeros años ochenta, cuando UGT se puso por delante de CCOO en las elecciones sindicales de 1982⁴. A partir de ese momento, CCOO encontró cada vez más difícil mantener un espacio de actuación favorable al PC, lo que facilitó la posterior crisis de este.

A partir de las elecciones generales de 1982, el PSOE estuvo prácticamente libre de competencia y de oposición política hasta casi finales de los ochenta. Las elecciones generales de 1986 reflejaron bien esta situación, en un momento en que el PSOE había conseguido los principales objetivos de carácter *nacional* que se había propuesto a su llegada al gobierno (saneamiento económico, consolidación democrática y el gran objetivo histórico de la integración europea). Pero el momento dulce de la etapa socialista duró poco y las elecciones generales de 1989 fueron distintas de las anteriores, entre

² Sobre la idea de *movimiento sociopolítico*, Sartorius 1976.

³ Algunos estudios pusieron de manifiesto diferencias significativas al nivel de los dirigentes sindicales de empresa en temas tales como la valoración de la transición (donde los dirigentes de CCOO aparecían como más bien «rupturistas», frente al «reformismo» de los de UGT) o la disposición al pacto con los empresarios (Fishman 1996: 171 y 265).

⁴ Sobre el cambio de correlación de fuerzas sindicales registrado entre las primeras elecciones sindicales (1978) y las terceras (1982), Maravall 1984: III.3. Por su parte, Fishman reconoce que la política de pactos de UGT la ayudó a «equiparar sus fuerzas con CCOO» (1996: 293).

otras razones, por la falta de entendimiento entre el gobierno socialista y los sindicatos. Esta falta de entendimiento se convirtió en confrontación abierta a finales de los años ochenta y preparó el camino para la retirada de apoyo por parte de algunos sectores obreros en los noventa, según veremos.

Llegamos así a la tercera fase en la evolución del sistema de partidos, caracterizada por una distribución relativamente equilibrada del voto entre izquierda y derecha, lo que convirtió a los partidos nacionalistas en árbitros de la situación política entre 1993 y 2000. En su primera legislatura de gobierno (1996-2000), el PP puso en marcha una estrategia de negociación con los agentes sociales que le dio espléndidos resultados tanto en términos económicos como políticos, lo que parecía abrir otro largo periodo de partido predominante, si no fuera porque un uso inadecuado de la mayoría absoluta conseguida en 2000 (que comenzó con un episodio de ruptura del diálogo social en 2002) ponía en riesgo tal expectativa. La crisis abierta tras los atentados del 11-M de 2004 dio al traste, finalmente, con dicha expectativa, dando lugar a una nueva alternancia en un sistema parecido al de los años noventa.

3. PARTIDOS Y SINDICATOS

Como se recordará, las posibilidades de concertación social durante la transición estuvieron restringidas no solo por la crisis económica, sino también en un doble sentido: por un lado, de los cuatro actores posibles (gobierno, patronal, CCOO y UGT) solo dos estuvieron disponibles de manera estable y continuada (la patronal y la UGT⁵). Por otro, la negociación se basó, principalmente, en un intercambio de moderación salarial por reconocimiento simbólico y provisión de algunos recursos organizativos, tratando de compensar así la dificultad de los sindicatos de obtener resultados satisfactorios y la consiguiente desafección de sus bases (la afiliación sindical descendió de manera muy sensible en esos años; Pérez Díaz 1987: 233 ss). Pese a sus limitaciones, este proceso parecía sentar las bases de una dinámica *neocorporativa* en la que, una vez alcanzado un status de casi monopolio de representación de los trabajadores, su capacidad de influencia fuera similar a la que habían conseguido los sindicatos de otros países europeos mediante las *políticas keynesianas* promovidas durante el largo periodo de posguerra. En los países del centro y norte de Europa que practicaron con más insistencia este tipo de arreglos, uno de sus efectos característicos fue la fijación de unas bases sociales estables que sirvieron de soporte a la socialdemocracia durante algún tiempo. Pero, en el caso español, la expectativa de conseguir un escenario de este tipo con la llegada del PSOE al gobierno se frustró tanto por razones geopolíticas como de coyuntura histórica (Merkel 1995). Tras el fracaso del gobierno socialista francés en 1981, el PSOE llegó al gobierno con la convicción de que la anterior experiencia socialdemócrata había dejado de ser una

⁵ Por una parte, el radicalismo de CCOO le apartó de las negociaciones. Por otra, el gobierno dio prioridad a las tareas de transición democrática sobre las cuestiones económicas y laborales.

fórmula de obligado cumplimiento, especialmente en lo que afectaba a las *políticas keynesianas* (Maravall 1995).

En consecuencia, las organizaciones sindicales perdieron el papel privilegiado que las *políticas keynesianas* les habían asignado anteriormente, con lo que el modelo socialdemócrata de relación entre partido y sindicato entró en crisis, dando lugar a la ruptura de la *familia socialista* española y al consiguiente divorcio entre el PSOE y la UGT. De hecho, una vez que los sindicatos vieron cumplidos los principales objetivos de la transición (la superación de la crisis económica, la consolidación democrática y la creación de un nuevo marco de relaciones laborales), no consiguieron ponerse de acuerdo con el gobierno socialista ni siquiera sobre los términos de la nueva negociación⁶. Las hostilidades entre el gobierno y los sindicatos se abrieron a mediados de los años ochenta con la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones y culminaron con la huelga general de diciembre de 1988. Ironías de la historia, lo que el sindicalismo revolucionario nunca había conseguido en la primera mitad del siglo XX lo consiguieron los sindicatos contra un gobierno socialista en tiempos de democracia. ¿Cómo se llegó a aquella situación?

Como ya adelantamos, las *políticas keynesianas* asociadas al pacto social de posguerra vivieron su momento de esplendor mientras la economía occidental se mantuvo expansiva, pero tropezaron con dificultades desde el momento en que la crisis de los años setenta aconsejaba cierto grado de ajuste o reforma económica. De ahí las dudas acerca de la contribución de estos pactos a la gobernabilidad en tiempos de crisis, cuando no la sospecha acerca de su carácter contraproducente, toda vez que dichos pactos pudieran limitar el alcance de las reformas económicas o laborales necesarias para la superación de la crisis (Pérez Díaz 1987: Cap. 3). Con esta premisa, se entiende que el primer gobierno socialista prefiriese tener las manos libres para tomar decisiones difíciles, dada la gravedad de la crisis económica en los primeros años ochenta, pero la superación de los graves problemas económicos y de inestabilidad democrática abría la posibilidad de una dinámica distinta a mediados de los ochenta.

Por otra parte, parece existir un amplio acuerdo acerca del carácter redistributivo de buena parte de esas políticas, ya sean educativas, sanitarias, de protección social, etc., lo que resultaba acorde, en principio, con el programa del partido socialista⁷. Pero no es menos cierto que tan pronto como los problemas que habían protagonizado la primera legislatura socialista quedaron superados, los conflictos distributivos, que habían estado contenidos desde finales de los setenta, volvieron al primer plano de la agenda política. Ahora bien, las demandas sociales llegaron esta vez de forma distinta a como lo habían hecho al principio de la transición, desplazándose desde el ámbito de la negociación salarial al de la redistribución (*salario social* en cualquiera de sus formas: pensiones, reivindicaciones estudiantiles, etc.), lo que emplazaba al gobierno socialista a profundizar en sus promesas de reforma.

Pues bien, cuando analizamos la evolución electoral de los años ochenta y noventa

⁶ Sobre las diversas explicaciones que se han dado al conflicto entre gobierno y sindicatos, Powell 2001: 428 ss.

nos encontramos con la siguiente secuencia de acontecimientos. A mediados de los años ochenta, se observa una retirada de apoyo al PSOE por parte de sectores de clases medias (la progresiva pérdida de las capitales de provincia en las elecciones municipales de 1987 y 1991 es un indicador de esta retirada). Si bien se trata de procesos multicausales, no es menos cierto que dicha retirada es difícilmente explicable al margen de que es por esa época cuando las clases medias españolas empiezan a pagar impuestos de acuerdo con estándares europeos (Boix 1996). De hecho, la refundación del Partido Popular, en 1988, representa, más allá del cambio de liderazgo (con la llegada de la generación de Aznar), un giro estratégico desde planteamientos y objetivos cargados de connotaciones morales y religiosas (donde destacaban temas como la enseñanza religiosa o la regulación del aborto) hacia cuestiones de carácter económico y fiscal, con el fin de atraerse a esos sectores de clase media que habían sido reticentes a sumarse al proyecto de «mayoría natural» de Fraga (Torcal y Chhibber 1995). Desde entonces uno de los hilos conductores de la estrategia del PP ha sido la promesa de rebajas fiscales para dichas clases medias, reiteradamente cumplida tras su llegada al gobierno en 1996.

Empero, no podemos olvidar la influencia de la relación del PSOE con los sindicatos en el desarrollo de los acontecimientos. Hay que tener en cuenta que en su segunda legislatura (1986-89), el gobierno socialista todavía no tenía una clara oposición política y que el factor principal de oposición se encontraba fuera del Parlamento, con la aproximación entre los dos principales sindicatos, que habían estado divididos y enfrentados hasta entonces. Dicha aproximación se convirtió en unidad de acción en la medida en que el desencuentro entre PSOE y UGT se hacía insuperable, por las razones que veremos en el próximo apartado. El desencuentro alcanzó su clímax en la huelga general de diciembre de 1988 (Juliá 1988; González 1996), con las siguientes consecuencias. Como efecto inmediato, los sindicatos consiguieron del gobierno importantes medidas redistributivas en materia de pensiones, sanidad, protección del desempleo, etc. (unas después de la huelga de 1988 y otras después de las elecciones de 1989; Powell 2001: 436 ss⁸), pero sin que el gobierno consiguiera a cambio apoyo alguno en materia de reforma laboral o de cualquier otro tipo. Como efecto mediato, se inició una progresiva pero imparable erosión de la autoridad moral del gobierno socialista y, con ello, la pérdida de lealtad de los trabajadores, especialmente de los más organizados y más próximos al *área de influencia* sindical (de hecho, la UGT dejó de pedir el voto de los trabajadores para el PSOE en las elecciones generales de 1989).

Se llega así a la crisis económica de 1993, cuando la combinación de recesión, desempleo y escándalos políticos terminó por reblandecer lo que había sido hasta entonces el núcleo duro del electorado socialista, con el consiguiente desplazamiento de su centro de gravedad hacia las *clases pasivas* (jubilados, amas de casa, etc.), para quienes los beneficios de las políticas redistributivas fueron más duraderos (universalización de pensiones, sanidad, educación, etc.). Estos sectores jugaron un papel de «cortafuegos

⁸ El lector puede encontrar un balance de las políticas socialistas en materia de bienestar en Powell 2001: 452-463.

electorales» a medida que se acercaba el momento del cambio político (primero, en 1993, cuando el PP parecía capaz de ganar las elecciones y, más tarde, en 1996, cuando por fin consiguió ganarlas), acudiendo en apoyo del PSOE hasta el punto de compensar las pérdidas de voto socialista en otros sectores sociales (González 2001).

Como ya adelantamos, una de las consecuencias de esta experiencia fue la crisis del modelo de relación que había prevalecido entre el partido socialista y su *sindicato afín* (o, como se decía hasta entonces, «hermano»): la UGT, lo que planteaba interrogantes sobre la posible deriva de un *socialismo sin sindicato* (González 1996). Hay que tener en cuenta, en este punto, que la dinámica de conflicto entre gobierno y sindicatos que recorre casi toda la etapa socialista (de mediados de los ochenta a mediados de los noventa hubo hasta cuatro convocatorias de huelga general, de alcance desigual) sirvió a los sindicatos, entre otras cosas, para reactivar un rasgo característico de la cultura sindical española del siglo xx. Pues, como ha señalado Santos Juliá (1988 y 1990), uno de los subproductos de largas y reiteradas experiencias de gobiernos ilegítimos y partidos débiles fue la creencia, más o menos explícita, de que los sindicatos constituyen la garantía última de defensa de los trabajadores, así como los depositarios finales de la legitimidad frente a oscuras alianzas de la patronal, los partidos y el gobierno de turno, siempre dispuestos a servirse de la política para satisfacer intereses espurios. En una coyuntura de devaluación ideológica del partido gobernante y de ausencia de una verdadera oposición política, este reflejo antipolítico se reactivó, empujando a los sindicatos a un papel que, en principio, no es el suyo. Es evidente, por tanto, que los sindicatos han dispuesto de un considerable potencial político-ideológico desde la transición, aunque no sea fácil evaluar el alcance de este potencial, debido al carácter crecientemente instrumental de la afiliación sindical (Pérez Díaz 1987: 238 ss).

Este dato es fundamental, en cualquier caso, para entender la configuración del campo de fuerzas político-electorales en los años ochenta y, en particular, los límites del electorado socialista. De acuerdo con una encuesta de 1991, dicho campo de fuerzas conformaba un electorado socialista de amplia base social que ocupaba el centro-izquierda del espectro ideológico y que se encontraba limitado por dos factores de carácter estructural: por un lado, la propiedad de los medios de producción definía unas viejas clases medias en posición conservadora, que constituían la base social preferente del Partido Popular y algunos partidos nacionalistas. Por otro, los niveles altos de cualificación definían unas nuevas clases medias relativamente polarizadas entre derecha e izquierda, lo que contradecía una teoría más o menos asentada por entonces de que las nuevas clases medias estaban siendo un factor de moderación social y, por ende, de *centramiento* político y electoral (dada su supuesta proximidad al votante medio). Esta relativa polarización correlacionaba en buena medida con la distinción entre sector público y privado, de tal manera que mientras las nuevas clases medias vinculadas al sector privado prestaban un nivel relativamente alto de apoyo al

⁸ Según Rodríguez Cabrero 2004, el gasto social español, medido en términos de *paridad de compra*, pasó de un 55% del promedio europeo en 1985 (mismo porcentaje de 1980) a un 63% en 1990. Diez años más tarde, en 2000, había descendido al 60% (p 107, cuadro 2).

PP, las vinculadas al sector público lo proporcionaban a Izquierda Unida (González 1993).

Esta polarización se puede explicar así: mientras las clases medias que dependen del sector privado son las más reacias a la presión fiscal y a las políticas redistributivas, las clases medias que dependen del sector público son en cierto modo beneficiarias de las políticas de bienestar en el ámbito de la sanidad, la educación, etc., con lo que su eventual rechazo a la presión fiscal se ve neutralizado por el beneficio que obtienen en términos de la expansión y mejora de su ámbito de desenvolvimiento profesional (los servicios públicos). Así, mientras los primeros rechazaban el carácter redistributivo de las políticas del PSOE, los segundos consideraban, en cambio, que las políticas del PSOE no eran suficientemente de izquierdas, lo que ilustraba un caso genuino de *radicalismo de izquierdas* (Parkin 1968). Esta dificultad del PSOE para disputar a IU estas fracciones de clase media, así como otros sectores sociales (en particular, una cierta aristocracia obrera implantada preferentemente en grandes empresas públicas), no se puede explicar al margen de la influencia de los sindicatos. Si analizamos una encuesta de sindicación realizada poco después de las elecciones generales de 1993⁹, nos encontramos con tres tipos de evidencia:

1. El *área de influencia* de los dos principales sindicatos (entendiendo por tal la agregación de afiliados, votantes en elecciones sindicales y simpatizantes) representaba prácticamente la mitad de los asalariados (objetivo potencial de la acción sindical). Dicho área de influencia se repartía a favor de CCOO en una proporción de 1,5 a 1, lo que sugiere que si bien el PSOE fue el principal perjudicado de las malas relaciones entre gobierno y sindicatos, la UGT también sufrió las consecuencias.
2. La relación entre partidos y sindicatos afines era claramente asimétrica: por el lado de la antigua *familia socialista*, más de la mitad de los electores situados en el *área de influencia* de UGT votaron al PSOE en las elecciones generales de 1993 (pese a las malas relaciones entre ambas organizaciones), pero dicha mitad solo representaba un tercio del electorado socialista (entre los asalariados). Por el lado de la antigua *familia comunista* (desde 1986 el Partido Comunista dio paso a Izquierda Unida como coalición electoral), no llegaban a un tercio los electores situados en el *área de influencia* de CCOO que votaban a IU, pero ese tercio representaba casi dos tercios del electorado de IU (siempre tomando como referencia los asalariados). De ahí la ansiedad con que los dirigentes de IU han seguido los pasos de los sindicatos y, en particular, de CCOO.
3. Por último, la aplicación de un modelo de regresión¹⁰ para aislar la influencia del sector (público/privado) respecto de la influencia de los sindicatos arroja como principal resultado que los efectos estadísticos de la primera variable (sector) prácticamente desaparecen al introducir la segunda (*área de influencia* de CCOO

⁹ Estudio 2088 del CIS, 1994.

y de UGT, por separado), lo que sugiere que la diferencia observable entre sector público y privado es solo aparente y que encubre, en realidad, la influencia organizativa e ideológica de CCOO en el sector público (y no solo entre los trabajadores manuales, una parte de los cuales trabajaba en empresas hoy privatizadas, sino también entre profesionales y técnicos de los servicios públicos: enseñanza, sanidad, etc.).

4. LA ETAPA SOCIALISTA

La vieja idea marxista de que la clase social es un factor fundamental para entender el conflicto en las sociedades capitalistas y, de paso, para entender la dinámica política de estas ha sido objeto de innumerables críticas. A efectos de esta exposición, basta con recordar las críticas relacionadas con la expansión del estado de bienestar. Aunque el estado de bienestar fue considerado inicialmente como resultado del conflicto de clase, pronto esta perspectiva se fue invirtiendo y la atención se fue desplazando, poco a poco, a las consecuencias que las políticas de bienestar estaban teniendo sobre la dinámica clasista de las sociedades post-industriales. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo los colectivos que quedaban fuera de la participación en el mercado de trabajo estuvieron a cargo de la institución familiar, pero fenómenos como la expansión del sistema educativo, el aumento de la esperanza de vida o el aumento del paro estructural no hicieron más que aumentar el protagonismo social de colectivos como la juventud, la tercera edad, los parados, etc., los cuales se han ido emancipando poco a poco de su antigua dependencia familiar mediante la consecución de becas, pensiones, subsidios, etc.

En la medida en que la antigua relación de dependencia perdía su carácter familiar y dichos colectivos se han visto atribuidos de derechos sociales y de las políticas consiguientes, la familia de origen ha dejado de ser el mejor predictor de su comportamiento político y electoral, emergiendo en su lugar nuevas categorías sociales cuyas preferencias políticas dependen cada vez menos de lo que ocurre en el mercado de trabajo (escenario privilegiado de las clases tradicionales, definidas a partir de la posición del «cabeza de familia») y cada vez más de lo que ocurre fuera de él. De ahí que los conflictos distributivos característicos del viejo orden industrial hayan ido cediendo al empuje de las tensiones redistributivas asociadas a las políticas de bienestar. Y puesto que la esfera de la producción y el trabajo ocupa a una proporción cada vez menor del electorado (al menos, del electorado masculino), todo esto no hace sino ampliar el margen de maniobra de los partidos a la hora de ampliar sus bases sociales o de buscar nuevos apoyos.

Desde esta perspectiva, se entiende mejor que el partido socialista mantuviese un volumen parecido de apoyos entre 1986 y 1996 (en torno a nueve millones de votos), pese al tremendo desgaste derivado de su tarea de gobierno y la consiguiente pérdida de

¹⁰ El modelo toma como variable dependiente el voto PSOE *versus* IU.

votantes: simplemente, consiguió reemplazar los votantes que perdía en el ámbito de la producción y el mercado de trabajo (como consecuencia de sus políticas fiscales, laborales, etc.) por otros nuevos que se beneficiaban de las políticas de bienestar (sanidad, pensiones, etc.), al tiempo que se mostraban temerosos de la llegada de un nuevo partido al gobierno, especialmente si este amenazaba con políticas de corte neoliberal, como hizo en algún momento el PP o quienes hablaban en su nombre (González 2001).

Este proceso de transferencias electorales dio lugar a un desplazamiento del centro de gravedad del electorado socialista desde las clases trabajadoras (su núcleo duro tradicional) a sectores de jubilados y amas de casa, dando lugar a una inversión del perfil de edad de dicho electorado y a una relativa ruralización del mismo, consecuencia del citado reemplazo de votantes jóvenes por otros más viejos. Con ser muchos los factores que intervienen en este tipo de procesos, el papel de las políticas socialistas de los ochenta resulta ineludible, por cuanto parecían enfrentarse al siguiente dilema: asegurar el crecimiento económico, en cuanto condición previa de la redistribución, profundizando, por tanto, en las reformas y, en particular, en la reforma del mercado de trabajo; o saldar la llamada *deuda social*, en cuanto compensación por un largo período de autocontención de las demandas salariales en beneficio de la consolidación democrática y de la superación de la crisis económica, a la que los sindicatos se creían con pleno derecho.

Este dilema implicaba la existencia de intereses en conflicto: por un lado, los trabajadores con mejores contratos y más capacidad para defender sus intereses (mediante la actuación sindical) preferían evitar la primera opción, en tanto que los trabajadores con dificultades de inserción podían estar interesados, por el contrario, en una cierta flexibilización. *A priori*, la razón es simple: para que estos últimos tuvieran más oportunidades de acceso al mercado de trabajo haría falta que los empresarios tuvieran más facilidades de despedir a los primeros. Ahora bien, en el caso español, este dilema tiene una dimensión generacional desde el momento en que los trabajadores estables y organizados suelen ser la generación paterna de los otros, con lo que la eventual resolución del conflicto depende de las estrategias familiares (Esping-Andersen 2000: 37-38). Cuando éstas optan, como ha sido característico en el sur de Europa, por una defensa a ultranza del cabeza de familia, los sindicatos encuentran el terreno abonado para la resistencia férrea ante cualquier tentativa de flexibilizar el mercado de trabajo.

La resolución del dilema se ha interpretado, en ocasiones, como si el gobierno socialista hubiera «preferido» «un paro más elevado, pero con empleos más seguros (...) y políticas sociales más generosas» (en lugar de más empleo, aunque fuese de peor calidad, y mayor desigualdad salarial; Powell 2001: 451), cuando la dinámica de los acontecimientos sugiere, más bien, que la movilización sindical dejó al gobierno sin margen de maniobra para elegir. Cabe suponer, en principio, que cualquier gobierno hubiera intentado conciliar los intereses de jóvenes y adultos, pero en la práctica el gobierno socialista hubo de concentrarse en aquello que los sindicatos reclamaban con más intensidad. Y aunque no era intención de nadie perjudicar la inserción laboral de los jóvenes, la atención preferente a medidas de protección social actuó como un impuesto sobre el empleo, satisfaciendo los intereses de los adultos a costa de los jóvenes. En la fase expansiva del ciclo económico, la situación resultante puede ser soportable, pero en

caso de recesión y crisis, el dilema que se presenta es mucho peor, pues o bien los jóvenes quedan nuevamente apartados del mercado de trabajo o aparecen los *contratos basura*, que fue lo que ocurrió finalmente con la reforma laboral de 1994.

Cabría pensar, en tal caso, que la responsabilidad de los acontecimientos (combinación de recesión económica y profundo malestar social) no fue tanto del gobierno como de los sindicatos, pero el problema es más complejo. Tradicionalmente, los sindicatos renunciaban a una parte de su capacidad de presión salarial a cambio de políticas sociales, lo que desplazaba, en cierto modo, el conflicto desde el ámbito de la empresa al ámbito de la negociación política (Przeworsky 1988). Hoy en día, los sectores que dependen de políticas sociales y, en particular, los pensionistas representan un tercio del censo electoral de las democracias avanzadas, lo que les permite actuar a modo de electorado bisagra capaz de dirimir a su favor cualquier conflicto redistributivo. En tales condiciones, los pensionistas disponen de una especie de veto electoral a cualquier tentativa de corregir el sistema de redistribución en contra de sus intereses, con relativa independencia de lo que hagan los sindicatos.

Queda, por último, la cuestión de por qué el conflicto potencial de intereses entre jóvenes y adultos no se hace explícito, cuya explicación más plausible la encontramos en la idea de un *pacto intergeneracional implícito* como vía de resolución de los problemas que no encuentran arreglo en el ámbito político (Garrido y Requena 1996). Como han señalado estos autores, «los costes que los jóvenes asumen en el espacio público, los ven compensados en el espacio privado. Mientras que el grueso de los recursos transferidos en forma de rentas van en su mayor parte a los mayores, los menores reciben unos servicios familiares que acompañan a una prolongada formación estatal» (1996: 56). En otras palabras, los problemas que las políticas públicas son incapaces de resolver (la inserción laboral de los jóvenes) se desplaza a las familias, que han de hacerse cargo de procesos emancipatorios cada vez más largos y costosos.

A lo largo del conflicto entre gobierno y sindicatos, las bases sociales de los partidos y, en particular, del partido socialista estuvieron sometidas a fuerte tensión, a raíz de la salida de votantes jóvenes. De acuerdo con la información que presentamos más adelante, mientras los anclajes relativos a la clase social se mantuvieron más o menos estables, los relativos a la edad cambiaron de signo (en 1996, la probabilidad del voto socialista aumentaba con la edad, al contrario de lo que ocurría diez años antes). Este dato es fundamental para entender el desenlace del conflicto, por cuanto indica que el protagonismo de los sindicatos no implicó una redistribución a favor de los trabajadores *stricto sensu*, sino, más bien, que si estos se vieron favorecidos no fue tanto en su condición de trabajadores *per se* como en su condición de trabajadores adultos más preocupados por las condiciones de su salida del mercado de trabajo que por la situación del empleo en su conjunto.

Si atendemos al perfil de edad de los electorados de los principales partidos (González y Salido 2003), la comparación de los datos de 1986 y 1996 corrobora la idea de la etapa socialista como un ciclo político a lo largo del cual se registra una mutación del electorado socialista en términos de edad. ¿En qué medida cambió la composición de clase ¹¹ de ese mismo electorado? Los datos correspondientes a 1986 nos ofrecen, en lo

esencial, un escenario típico de conflicto clasista, con una peculiaridad: mientras los trabajadores manuales concentraban su apoyo en el PSOE y en IU (votaron al PSOE diez puntos por encima de la media, en tanto que duplicaron el nivel medio de apoyo a IU ¹²), las viejas clases medias se decantaban claramente por AP ¹³. La peculiaridad consistía en que las nuevas clases medias (*clase de servicio*) parecían quedarse en tierra de nadie: pues si, por un lado, mostraban cierto rechazo al PSOE (al que votaban diez puntos por debajo de la media), por otro la oferta de AP no resultaba especialmente atractiva ¹⁴. (En ese momento, los colectivos de jubilados y amas de casa no se habían decantado todavía por ninguno de los grandes partidos.)

Diez años más tarde, el conflicto clasista, aunque todavía vigente, se había reblandecido, como consecuencia de que el PP había conseguido reducir distancias con el PSOE entre los trabajadores manuales (donde el PSOE duplicaba el voto de AP diez años antes), al tiempo que las nuevas clases medias habían aumentado su rechazo al PSOE, pero no tanto para concentrar su apoyo en el PP como para polarizarse entre PP e IU (recordemos nuestra referencia al radicalismo de clase media). El rechazo al PSOE estaba ya muy extendido entre los activos, con lo que su supervivencia pasó a depender de los jubilados y las amas de casa, que le votaron muy por encima de la media (véanse tablas 1 y 2).

5. LA ETAPA POPULAR

Tal como adelantamos, con las elecciones generales de 2000 se cierra, momentáneamente, el periodo de sistema bipartidista y de equilibrio de fuerzas que caracterizaron los años noventa, logrando el PP su primera mayoría absoluta. Tal éxito electoral del PP se explica, como veremos enseguida, por una combinación venturosa de bonanza económica y paz social. Más concretamente, la dinámica de *diálogo social* emprendida por el PP nada más llegar al gobierno, en 1996, fue decisiva no solo para la consecución de la bonanza económica, sino también para la creación de un clima de opinión favorable a la acción de gobierno (González 2002).

Las elecciones de 2000 fueron importantes no solo por la mayoría absoluta del PP, sino también porque dicha mayoría absoluta estuvo acompañada de una reducción significativa del componente clasista del voto al PP (Caínzos 2001: 123-124), lo cual, a efectos de nuestro argumento, se puede interpretar como que el PP recibió el apoyo de

¹¹ Sobre el modelo de clase empleado en este análisis, véase el apéndice metodológico.

¹² El PSOE obtuvo en aquella ocasión un 30,6% de los votos sobre censo (con una abstención del 29,5%), en tanto que IU obtuvo un 3,3%. Véase Anexo.

¹³ En este punto, el escenario se parecía bastante al descrito por Maravall respecto a las elecciones de 1979 (1984: 213).

¹⁴ Esta es la principal novedad respecto a los datos de Maravall de 1979. Entonces UCD aventajaba claramente al PSOE entre «directivos y empresarios», pero el PSOE competía bien en la categoría de «empleados, funcionario y profesiones liberales» (mucho más numerosa que la primera), donde igualaba el nivel de voto de la UCD. Puesto que AP no parecía haberse beneficiado de la pérdida de

votes de izquierda con un perfil más bien distinto de los que ya tenía (más proletariado, por así decir), lo que modificó, en cierto modo, su base social. ¿Cómo explicar ese trasvase de votantes de izquierda, de perfil más bien trabajador, hacia el PP? Es bien sabido que la apurada victoria del PP en las elecciones generales de 1996 le obligó a una acción de gobierno que no estaba prevista en el guión con que el PP se había presentado a aquellas elecciones. En coherencia con su necesidad de apoyo parlamentario, el PP siguió un curso de acción a la medida de sus nuevos aliados (los nacionalistas), rectificando buena parte de su programa electoral y, en particular, lo tocante al Estado de las Autonomías. Y del diálogo con las fuerzas políticas nacionalistas se pasó al *diálogo social* con resultados no menos espectaculares.

Conviene recordar, según vimos, que el drama de los últimos gobiernos socialistas no radicó tanto en la situación de la economía y el mercado de trabajo como en el clima de desconfianza respecto a su capacidad para reconducirla, desconfianza compartida por los sindicatos. De ahí que el PP acometiera el *diálogo social* como una prioridad de su tarea de gobierno, en el marco de un proceso de *aprendizaje de los agentes sociales*, en virtud del cual estos renunciaban a influir sobre el sistema de relaciones industriales desde consideraciones meramente políticas (Espina 1999: 378 ss). En consecuencia, la legislatura estuvo marcada por una combinación venturosa de bonanza económica (a partir de la entrada de España en la Unión Monetaria) y *diálogo social* (reforma laboral, acuerdo sobre pensiones, etc.) que terminó por traducirse en la mayoría absoluta del PP en 2000.

Ahora bien, si el *diálogo social* y el consenso de los agentes sociales sirvieron para legitimar la acción de gobierno y certificar su competencia en materia económica en la primera legislatura *popular* (González 2002), igualmente cabe argumentar que su ruptura, en la primavera de 2002, sirvió para lo contrario en la segunda (González 2004). Quizá la mejor prueba de la importancia del *diálogo social* fuera que el presidente Aznar se comprometió, poco después de las elecciones de 2000, a mantener el diálogo sin condiciones¹⁵. Mediada la legislatura, había ya, sin embargo, numerosos indicios de que la mayoría absoluta estaba modificando el estilo de gobierno que tan buen resultado diera en la legislatura anterior. Así las cosas, lo que en el otoño de 2001 se presentó como una oferta de diálogo a los agentes sociales se tornó amenaza de imposición unilateral en la primavera de 2002.

No se trata con esto de imputar al gobierno del PP toda la responsabilidad por la quiebra del *diálogo social*. Es obvio que los sindicatos también contribuyeron a ella: en el caso de UGT, el endurecimiento de sus posiciones se había hecho evidente con motivo de una negociación anterior en torno a la reforma del sistema de pensiones, dejando a

votos del PSOE en esa categoría entre las elecciones de 1979 y las de 1986, todo apunta a que la principal beneficiaria fue, en 1986, la abstención y, más tarde, IU, como veremos. Lo que sugiere una hipótesis sobre la trayectoria de voto de esta categoría, en virtud de la cual debió jugar un papel importante en el llamado «voto prestado» al PSOE en las elecciones de 1982 (cuando el perfil de clase del electorado socialista suavizó sus aristas), voto que, procedente de la UCD, resultó ser un préstamo a corto plazo.

TABLA 1.
VOTO SEGÚN CLASE, 1986

	<i>Viejas clases medias</i>	<i>Nuevas clases medias</i>	<i>No manual</i>	<i>Manual cualif</i>	<i>Manual no cualif</i>	<i>Parado</i>	<i>Jubilado</i>	<i>Ama de casa</i>	<i>Joven</i>	<i>Total</i>
AP-CDS	36,7	24,8	23,0	21,7	17,8	13,0	27,5	28,3	16,0	24,9
PSOE	25,9	21,4	29,2	41,4	41,4	32,9	35,9	33,5	19,6	31,7
IU	2,1	3,6	3,7	5,6	6,8	5,1	2,7	1,6	4,5	3,3
CIU-PNV	4,2	5,6	6,5	3,2	1,6	2,8	4,4	4,2	2,4	4,0
Otros	6,5	10,2	8,5	5,8	5,9	8,5	3,8	3,8	14,3	6,6
Abstención	24,5	34,4	29,2	22,2	26,4	37,6	25,7	28,7	43,3	29,6

Fuente: estudio 1737 del CIS.

TABLA 2.
VOTO SEGÚN CLASE, 1996

	<i>Viejas clases medias</i>	<i>Nuevas clases medias</i>	<i>No manual</i>	<i>Manual cualif</i>	<i>Manual no cualif</i>	<i>Parado</i>	<i>Jubilado</i>	<i>Ama de casa</i>	<i>Joven</i>	<i>Total</i>
PP	42,8	34,7	30,2	21,4	25,9	23,4	32,1	32,4	32,0	30,9
PSOE	23,3	18,1	24,3	31,8	31,7	29,8	40,9	34,6	17,7	29,9
IU	4,8	12,0	10,1	14,5	11,9	12,2	4,0	5,2	11,5	8,4
CIU-PNV	6,0	6,9	6,4	4,7	4,0	3,4	5,7	3,3	3,6	4,8
Otros	3,7	6,3	6,0	4,7	3,8	4,0	1,7	2,3	6,8	3,9
Abstención	19,4	21,9	23,1	22,9	22,8	27,2	15,6	22,3	28,4	22,0

Fuente: CIS, 2207 y 2210.

CCOO sola con el gobierno y poniendo en cuestión el principio de unidad de acción que había presidido la actividad sindical durante los años noventa. En el caso de CCOO, porque la crisis que arrastraba esta organización desde su anterior Congreso estalló en el invierno de 2002¹⁶, reduciendo el margen de maniobra de su secretario general, José M^a Fidalgo, de cara a nuevos acuerdos con el gobierno.

Pero no es menos evidente que, una vez que los sindicatos hicieron pública su decisión de ir a la huelga general si el gobierno acudía a medidas unilaterales, este decidió afrontar el coste de la huelga, en lugar de impedirla, con la publicación del llamado «decretazo». Se ha especulado mucho sobre las razones de este giro *decisionista* del PP¹⁷. Más allá de lo obvio (la mayoría absoluta), el argumento aducido habitualmente apunta a una supuesta pretensión de liderazgo neoliberal (o neoconservador) no solo ante sus bases «naturales» (la patronal), sino también ante el resto de los gobiernos europeos en un momento en que Aznar ostentaba la presidencia europea. No es cosa, sin embargo, de detenernos en el desarrollo del conflicto, sino tan solo de recordar la rectificación del gobierno y el laborioso restablecimiento del diálogo emprendido por el nuevo Ministro de Trabajo nombrado poco después del conflicto¹⁸.

La posterior implicación del gobierno español en la guerra de Irak aumentó la impopularidad y el *desgaste* del PP, pero el casi empate de las elecciones municipales de mayo de 2003 (que el PSOE ganó por unas décimas) reflejaba, en cierto modo, una situación de bloqueo entre un PP que parecía haber abandonado el centro político y un PSOE incapaz de recuperarlo (Tusell 2004). De cara a las elecciones generales, la situación parecía decantarse de nuevo a favor del PP, pero los atentados del 11-M trastocaron de manera súbita el escenario electoral, suscitando la movilización de millones de votantes (muchos de los cuales no pensaban votar) que acudieron a las urnas para sancionar la gestión gubernamental de la crisis, percibida como manipulación por amplios sectores de la opinión pública (González 2004).

Como resultado de esta movilización electoral, el PP, que se presentaba favorito un mes antes de las elecciones (de acuerdo con el estudio preelectoral 2555 del CIS), las perdió. Con ello, se recompuso el alineamiento de las bases electorales en un doble sentido: por un lado, los votantes de izquierda que se habían pasado al PP en 2000 regresaron al PSOE, recomponiendo parcialmente el perfil clasista de los electorados tanto socialista como popular. Por otro, y de acuerdo con la dinámica de edad asociada

¹⁵ «El presidente del Gobierno (...) se comprometió ayer con el secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez, a «no imponer una reforma laboral» ni a tomar medidas unilaterales para el abaratamiento del despido. Para el Ejecutivo, el método de diálogo social que se ha seguido en los últimos cuatro años ha sido el «adecuado»» (*El País*, 23 de marzo de 2000).

¹⁶ «Crisis en el primer sindicato por la estrategia de concertación social del Gobierno» «La sustitución del secretario de organización y número dos de CCOO, Rodolfo Benito, divide al sindicato. (...) Así aflora la crisis que CCOO arrastra desde hace más de dos años.» *La Vanguardia*, 18 de febrero de 2002. Dicha crisis hacía referencia a la división de CCOO entre el sector oficial mayoritario y el llamado «sector crítico», el cual ha venido representando en torno a un tercio de los delegados de los últimos congresos. La falta de acuerdo entre el citado Rodolfo Benito y este «sector crítico» ha permitido a Fidalgo sobrellevar la crisis y mantener su estrategia de concertación.

a los ciclos políticos, los jóvenes se sumaron al electorado socialista para abrir un nuevo ciclo.

Por lo que se refiere a la clase social, la distribución del voto en 2004 reproduce hasta cierto punto la distribución de los ochenta. Por el lado de las *clases activas*, hay que hacer una doble matización: la primera, de carácter puntual, se refiere a las nuevas clases medias, que habiendo sido las más abstencionistas en 1986 (en perjuicio del PSOE), parecen haber sido las más participativas en 2004 (en beneficio del PSOE). La segunda matización, la más importante, afecta a la pauta de voto, pues así como el componente clasista del voto era muy importante en 1986 tanto a la hora de definir el perfil del PP como el del PSOE (dada la simetría entre ambos), el componente de clase de 2004 sigue afectando al perfil del PP, pero menos al del PSOE¹⁹. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esto último puede estar asociado al diferente carácter de ambas elecciones (de continuidad, en 1986; de cambio, en 2004).

Por el lado de las *clases pasivas*, ya habíamos comentado con anterioridad que los dos principales colectivos (jubilados y amas de casa) no estaban decantados todavía a favor de ningún partido en 1986, pero lo hicieron a favor del PSOE en 1996 y a favor del PP en 2004, en ambos casos a favor del gobierno saliente, lo que los confirma como factor de estabilidad política (o de inercia, si se quiere), por contraste con los jóvenes, que actúan como factor de cambio.

6. CONCLUSIONES

La primera conclusión que se desprende del estudio de las bases sociales de la política, tal como aquí lo hemos hecho, es la conveniencia de renunciar a cualquier idea de «bases naturales», las cuales permitirían, a partir de unos intereses definidos de antemano, la formación de coaliciones, las cuales darían, a su vez, acceso a la ansiada *hegemonía* política e ideológica. No hay nada de esto en la política de nuestros días: las organizaciones de clase tienen cada vez más dificultades para definir unos intereses que se redefinen continuamente, cuanto más a establecer coaliciones que se rehacen con cada cambio en la correlación de fuerzas. Hay que tener en cuenta que nos movemos en el terreno de la *formación de clase*, donde es verdad que las organizaciones de clase (los sindicatos, en nuestro caso) juegan un papel importante, pero donde no lo es menos que la cadena que conduce desde la posición de clase a la formación de preferencias políticas

¹⁷ «¿Por qué Aznar rompe el diálogo social después de seis años de entendimiento con los sindicatos? ¿Por qué tira por la borda uno de los capitales más importantes de su gestión...?», se preguntaba Nicolás Sartorius en un artículo titulado «El error Aznar», *El País*, 31 de mayo de 2002. Desde la perspectiva que adoptamos aquí, no conviene olvidar, además del argumento expuesto más arriba, otro tipo de factores, de carácter estructural, como el debilitamiento sindical derivado de la política de privatizaciones, las cuales estaban afectando al núcleo de implantación preferente de los sindicatos.

¹⁸ «...somos conscientes de que es la primera vez en la historia de la democracia que con una huelga general el Gobierno rectifica algo que ya estaba implantado», sostiene el secretario de acción sindical de UGT.» *El País*, 14 de octubre de 2002.

TABLA 3.
VOTO SEGÚN CLASE, 2004

	<i>Viejas clases medias</i>	<i>Nuevas clases medias</i>	<i>No manual</i>	<i>Manual cualif</i>	<i>Manual no cualif</i>	<i>Parado</i>	<i>Jubilado</i>	<i>Ama de casa</i>	<i>Joven</i>	<i>Total</i>
PP	35,9	32,1	23,6	17,3	18,6	20,9	37,2	36,0	23,9	28,7
PSOE	25,3	30,0	31,3	34,0	36,6	34,8	33,0	33,4	34,0	32,6
IU	3,9	6,2	5,7	5,3	6,4	4,7	1,1	2,2	3,6	3,9
CiU-PNV	3,3	5,6	3,0	3,3	3,3	0,6	5,8	3,4	0,3	3,6
Otros	4,9	9,9	10,7	8,9	6,4	7,5	3,2	2,8	6,9	6,4
Abstención	26,6	16,3	25,8	31,2	28,6	31,5	19,6	22,0	31,3	24,8

Fuente: CIS, 2559.

es cada vez más compleja e indeterminada.

En segundo lugar, la configuración inicial del sistema de partidos, con un partido socialista ocupando el centro-izquierda y un partido comunista ocupando un espacio de izquierda radical, es inseparable de la existencia de dos sindicatos que irrumpieron en la transición con estrategias diferenciadas, cuando no antagónicas. En la medida en que dichas estrategias han convergido y se ha establecido una pauta sostenida de unidad sindical, la competencia inicial entre PSOE y PCE se ha ido diluyendo, dejando cada vez menos espacio para la implantación de IU. Esto explica, en buena medida, que dado el carácter roji-verde de esta coalición electoral, el componente verde (o alternativo) se imponga, poco a poco, sobre el rojo.

En tercer lugar, es frecuente subestimar la capacidad de los sindicatos ante el empuje arrollador del capitalismo, cuando una observación cuidadosa de los acontecimientos sugiere una eficacia más que notable a la hora de defender los intereses de su *área de influencia*, como hemos podido ver con motivo de las huelgas generales de 1988 y 2002. Esto no quiere decir que los sindicatos lo tengan fácil, ni mucho menos. Algunas de las dificultades son bien conocidas, tales como la individualización de las relaciones laborales en las economías postindustriales y la consiguiente proliferación de intereses corporativos cada vez menos susceptibles de ser integrados en esquemas organizativos de corte clasista. Otras son menos evidentes, pero no menos relevantes.

En el esquema keynesiano clásico, las políticas sociales eran una especie de variable dependiente de la capacidad de presión sindical, de tal suerte que los sindicatos renunciaban a una parte de esa capacidad a cambio de políticas de bienestar, lo que desplazaba, en cierto modo, el conflicto desde el ámbito de la distribución al de la redistribución, con la mediación del estado. Hoy en día, esa dependencia está diluida, desde el momento en que los sectores que dependen de políticas sociales y, en particular, los pensionistas representan un tercio del censo electoral de las democracias avanzadas, lo que les proporciona una especie de veto electoral a cualquier tentativa de corregir el sistema de redistribución en contra de sus intereses, con relativa independencia de lo que hagan los sindicatos, lo que empuja a estos a actuar cada vez menos como fuerzas reformistas y cada vez más como factores de bloqueo ante eventuales reformas.

Por lo que se refiere a las pautas de voto, la dinámica electoral de las últimas décadas nos ha permitido observar un cierto tránsito desde el *voto de clase* al *voto económico* de 2000, momento de máximo debilitamiento del *voto de clase* (Caínzos 2001), parcialmente restablecido en las últimas elecciones. Y así como el componente de clase del voto funciona como un anclaje estructural que da estabilidad al proceso político, el *efecto de edad* funciona como un factor de cambio, propiciando el voto de castigo tanto en 1996 como en 2004 y, con ello, el cambio de ciclo político (véase Apéndice metodológico).

¹⁹ Y prácticamente nada al de IU, si bien esto ya se era observable en 1996.

REFERENCIAS

- BOIX, Carles (1996), *Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Estrategias económicas conservadoras y socialdemócratas en la economía mundial*, Madrid, Alianza Universidad.
- CAÍNZOS, Miguel (2001), «La evolución del voto clasista en España, 1986-2000», *Zona Abierta* 96/97: 91-171.
- ESPINA, A. (1999), «El «Guadiana» de la concertación neocorporatista en España: de la huelga general de 1988 a los acuerdos de 1997», en F. MIGUÉLEZ y C. PRIETO, «*Las relaciones de empleo en España*», Madrid, Siglo XXI, 23-50.
- ESPING-ANDERSEN, G. (2000), *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*, Barcelona, Editorial Ariel.
- FISHMAN, R. (1996), *Organización obrera y retorno a la democracia en España*, Madrid, CIS, Monografías 151.
- FRAILE, Marta (2002), «El voto económico en las elecciones de 1996 y 2000: una comparación», *Revista Española de Ciencia Política*, 6: 129-151.
- GARRIDO y REQUENA (1996), *La emancipación de los jóvenes en España*, Madrid, Instituto de la Juventud.
- GINER y MORENO (1990), «Centro y periferia: la dimensión étnica de la sociedad española», en GINER, Salvador, *España. Sociedad y Política*, Madrid, Espasa-Calpe, 169-197.
- GONZÁLEZ, J. J. (1992), «Clases sociales: estudio comparativo de España y la Comunidad de Madrid 1991», Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
- (1993), «Clase y apoyo electoral», *Sistema*, 112: 41-71.
- (1996), «Clases, ciudadanos y clases de ciudadanos. El ciclo electoral del pos-socialismo (1986-1994)», *REIS* 74: 45-76.
- (2001), «Clases, cohortes, partidos y elecciones: un análisis de la experiencia española (1986-1996)», *Revista Internacional de Sociología*, nº 29: 91-113.
- (2002), «Las elecciones generales de 2000. Voto ideológico/voto racional», *Revista Internacional de Sociología*, nº 32: 7-33.
- (2004), «Voto y control democrático. Las elecciones del 14-M», inédito.
- GONZÁLEZ y SALIDO (2003), «El voto de los jóvenes», *Revista de estudios de Juventud*, INJUVE, 159-172.
- JULIÀ, Santos (1988), *La desavenencia. Partido, sindicatos y huelga general*, El País-Aguilar.
- (1990), «Sindicatos y poder político en España», *Sistema*, 97: 41-62.
- MARAVALL, J. M. (1984), *La política de la transición*, Madrid, Taurus.
- (1992), *Los resultados de la democracia*, Madrid, Alianza Editorial.
- MERKEL, W. (1995), *¿Final de la socialdemocracia? Recursos de poder y política de gobierno de los partidos socialdemócratas en Europa Occidental*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim.
- PARKIN, Frank (1968), *Middle Class Radicalism. The Social Basis of the British Campaign for Nuclear Disarmament*, Praeger.
- PÉREZ DÍAZ, V. (1987), *El retorno de la sociedad civil*, Madrid, Instituto de Estudios Económicos.
- POWELL, C. (2001), *España en democracia, 1975-2000. Las claves de la profunda transformación de España*, Barcelona, Plaza&Janés.
- RODRÍGUEZ CABRERO, G. (2004), *El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo y retos*, Madrid, Editorial Fundamentos.
- SARTORIUS, N. (1976), «Dialéctica de la unidad en el movimiento sindical», *Zona Abierta*, 7: 15-32.
- SCHMITTER y LEHMBRUCH (coordinadores) (1992), «Neocorporativismo I», Madrid, Alianza Editorial.
- TORCAL y CHHIBBER (1995), «Elites, cleavages y sistema de partidos en una democracia consolidada: España (1986-1992)», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 69: 7-38.
- TUSELL, Javier (2004), *El aznarato. El gobierno del PP 1996-2003*, Madrid, Aguilar.

Apéndice metodológico

Los datos que presentamos en este artículo proceden, en el caso de las elecciones de 1986, del estudio 1737 del CIS (marzo de 1988), con 27.000 entrevistas. Para las elecciones de 1996, hemos agregado los estudios 2207 (preelectoral) y 2210 (postelectoral) del CIS, lo que proporciona una muestra de más 10.000 entrevistas. Por último, los datos de 2004 están tomados del estudio 2559 del CIS (postelectoral). Los datos de encuesta están ajustados a los datos registrados en dichas elecciones mediante ponderación. Las columnas de los totales no coinciden exactamente con los datos oficiales debido a que la ponderación se ha hecho sobre voto útil, de manera que los votos blancos y nulos se computan como abstención.

Por lo que se refiere al análisis de clase, hemos utilizado como variable independiente el modelo de J. Goldthorpe (González 1992) con las adaptaciones expuestas en estudios anteriores (González 1996). El modelo distingue entre *clases activas* (los individuos vinculados al mercado de trabajo, que en el caso español representan más o menos la mitad del censo electoral) y *clases pasivas*, entendiéndose por tales: (a) los que ya han salido del mercado de trabajo (jubilados); (b) los que están al margen del mismo (amas de casa); y (c) los que todavía no han accedido al mismo: jóvenes, entendiéndose por tales estudiantes y buscadores de primer empleo.

Las categorías del modelo resultante aparecen en el siguiente orden:

- 1 *Viejas clases medias* (incluyen las clases IVa, IVb y IVc de Goldthorpe): pequeños empleadores y autónomos no profesionales, así como agricultores, pescadores, etc.
- 1 *Nuevas clases medias* (equivalen a la clase de servicio de Goldthorpe): profesionales, técnicos, directivos y supervisores no manuales.
- 1 *Trabajadores no manuales* (clases IIIa y IIIb): empleados no manuales de rutina en la administración y el comercio, así como trabajadores de servicios personales y de seguridad.
- 1 *Trabajadores manuales cualificados* (clases V y VI): supervisores manuales y obreros cualificados.

- 1 *Trabajadores manuales no cualificados* (clases VIIa y VIIb): agrarios y no agrarios.
- 1 *Parados* (con empleo anterior).
- 1 *Jubilados*.
- 1 *Amas de casa*.
- 1 *Jóvenes* (estudiantes y buscadores de primer empleo).
- 1 *Resto*: no clasificables.

La razón de considerar a los parados con empleo anterior como una categoría aparte dentro de las *clases activas* no es en modo alguno la de considerarlos una clase, sino todo lo contrario. Dado que la mayoría de estos parados procede del trabajo manual, se trata de comprobar empíricamente que su comportamiento es muy parecido, a lo largo del período de referencia, al de las categorías de trabajadores manuales de las que en realidad forman parte.

Para terminar, vamos a presentar los resultados de un sencillo modelo de regresión que nos permite controlar los efectos de las principales variables de carácter estructural que influyen en el voto (concretamente, clase, edad y hábitat). El modelo toma como variable dependiente el voto PP (AP-CDS, en 1986) *versus* PSOE, y los resultados pueden observarse en la *Tabla 4*. En lo fundamental, confirman lo que venimos diciendo: la estabilidad de la clase, cuyos coeficientes se mantienen a lo largo del periodo, y el cambio de signo de los coeficientes de la edad con los ciclos políticos. Así, los jóvenes (<35 años) presentaban una alta probabilidad relativa de voto socialista en 1986, que cambió de signo en 1996 (salida del gobierno de los socialistas) y que se recuperó con creces en 2004, con la salida del PP. Por último, los hábitat no rurales presentaban una alta probabilidad relativa de voto socialista en 1986, que desapareció en 1996 (momento de máxima ruralización del voto socialista) y que se recuperó parcialmente en 2004 (al menos, en el hábitat intermedio: 10-100 mil habitantes) —si bien este último efecto puede ser más un efecto de la Comunidad Autónoma que del hábitat propiamente dicho.

TABLA 4.
 MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA ESTIMAR LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES ESTRUCTURALES

<i>Clase (ref: Autónomo)</i>	<i>1986</i>		<i>1996</i>		<i>2004</i>	
	<i>Coef. (error) Sign.</i>		<i>Coef. (error) Sign.</i>		<i>Coef. (error) Sign.</i>	
• <i>Profesional</i>	-0,09 (0,08)		-0,15 (0,10)		-0,02 (0,14)	
• <i>No manual</i>	0,15 (0,07) *		0,26 (0,09) **		0,30 (0,14) *	
• <i>Manual cualif.</i>	0,86 (0,07) **		1,17 (0,09) **		0,91 (0,13) **	
• <i>Man. no cualificado</i>	1,10 (0,06) **		1,09 (0,08) **		0,90 (0,13) **	
<i>Edad (ref: >54)</i>						
• <35	0,60 (0,05) **		-0,17 (0,07) **		0,78 (0,10) **	
• 35-54	0,08 (0,05)		-0,03 (0,07)		0,43 (0,10) **	
<i>Hábitat (ref: <10 mil)</i>						
• 10-100 mil	0,52 (0,05) **		0,03 (0,07)		0,26 (0,11) **	
• >100 mil	0,53 (0,05) **		-0,04 (0,07)		0,13 (0,11)	
• <i>Nº de casos</i>	10716		5594		2700	
• <i>Chi cuadrado</i>	868,8		425,4		174,8	
• <i>Pseudo R2</i>	0,11		0,10		0,08	
<i>% casos correctos</i>	63,5%		63,3%		61,8%	

Fuente: estudios 1737 (1986), 2207-2210 (1996) y 2559 (2004).

** Significatividad al 99%, * significatividad al 95%.